Movimientos sociales y desarrollo económico en Chocó y Buenaventura

Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana
Número:
270
DOI:
https://doi.org/10.32468/dtseru.270
Publicado:
Miércoles, 8 Agosto 2018
Clasificación JEL:
O10, I38
Palabras clave:
Movimientos sociales, DESARROLLO ECONÓMICO
Descargar documento

Lo más reciente

Settlement liquidity in the Colombian large-value payment system: the role of reserve requirements
Fredy Gamboa-Estrada, Freddy Cepeda-López, Javier Iván Miguélez-Márquez
Geopolitical risk and emerging market sovereign risk premia
Fredy Gamboa-Estrada, José Vicente Romero
Assessing the effects of recent provisioning rules on consumer credit allocation in Colombia
Fredy Gamboa-Estrada, Diego Cuesta, Camilo Sanchez-Quinto
Otras Publicaciones

Aunque los movimientos sociales en Chocó y Buenaventura han sido una constante desde mediados del siglo XX, el rezago social y económico que experimentan estos territorios sigue sin presentar los avances esperados.

En la mayoría de los casos, las protestas terminan con el compromiso del gobierno nacional de realizar inversiones para reducir las brechas. Sin embargo, las manifestaciones regresan tiempo después, argumentadas en el incumplimiento o el poco avance de lo pactado.

Ante este panorama han surgido dos posiciones opuestas. Por un lado, los habitantes mantienen la idea de un olvido estatal, y por el otro, el gobierno nacional sugiere que persiste el uso ineficiente de los recursos existentes.

El Documento de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana (DTSERU) 'Movimientos sociales y desarrollo económico en Chocó y Buenaventura' se encarga de revisar la evidencia que permite examinar estas tesis.

La investigación evidencia que, en efecto, los gobiernos nacionales y locales han

ejecutado más recursos en los últimos años. No obstante, las necesidades de inversión que revelan los indicadores, y que coinciden con las peticiones de las protestas, superan en algunos casos los fondos disponibles.

Lo cierto es que los principales indicadores económicos y sociales son consistentes con las peticiones de las protestas cívicas. En el caso de Quibdó, el porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) no ha presentado gran avance en las últimas décadas: pasando de 86% en 1973 a 90% en 2005. Por su parte, en Buenaventura, a pesar de una reducción de 40 puntos porcentuales en el mismo periodo, en 2005 el NBI continúa ubicándose por encima del total nacional (36% en Buenaventura frente a 28% para el total nacional).

Las cifras anteriores podrían avalar la idea del olvido estatal, aunque la dinámica de las principales fuentes de ingreso ofrece una perspectiva adicional. Las regalías, las transferencias nacionales del Sistema General de Participaciones (SGP) y los ingresos propios han crecido de manera importante y por encima del total nacional en los últimos años.

La hoja de ruta

Este DTSERU señala que es esencial revisar la calidad del gasto público en el territorio y plantea opciones de política pública viables para lograr satisfacer las demandas sociales de los habitantes de Chocó y Buenaventura. “Mejorar la gestión pública local, a través de una mayor transparencia y calidad del gasto, podría ser una buena oportunidad para trabajar en la superación del rezago”, propone esta investigación realizada por Jaime Bonet Morón, Yuri Reina Aranza y Diana Ricciulli Marin.

En conclusión, Buenaventura y Chocó requieren la movilización de recursos, tanto propios como de transferencias del gobierno central, y mejorar la calidad del gasto en los gobiernos locales. Esto será posible a través de una adecuada gestión fiscal territorial, que involucre los dos componentes de las finanzas públicas: los ingresos y los gastos.

Las mejoras efectivas en la recaudación, unidas a una mejor planificación financiera y presupuestaría, crearían un ambiente positivo en la comunidad y en las otras instancias del gobierno, generando credibilidad y aceptación de la administración pública local.

Un elemento clave es el uso de las herramientas tecnológicas en la gestión fiscal, las cuales ayudan a incrementar la transparencia, reducir costos e incrementar los proveedores.

La implementación de estas alternativas para mejorar la gestión fiscal territorial, requiere de la buena voluntad de las partes. La construcción de una institucionalidad en el territorio debe ser apoyada por el gobierno nacional a través de programas que formen un equipo local en formulación, diseño y ejecución de proyectos, gestión tributaria y planeación financiera.